

Yopal, Casanare 21 de abril de 2025

Señor:

JUEZ REPARTO.

E. S. D.

Asunto: **ACCIÓN DE TUTELA**

Accionante: **BRIAN MARTÍNEZ SALAS**

Accionado: **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE – JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE CHITA**

Derechos Vulnerados: **DERECHO AL TRABAJO Y AL DEBIDO PROCESO**

Yo, **BRIAN MARTÍNEZ SALAS** identificado con la cédula de ciudadanía 1.065.893.864 de Aguachica - Cesar, acudo a su Despacho en ejercicio de la ACCIÓN DE TUTELA consagrado en el Art. 86 de la Constitución Política en contra del Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá y Casanare, por cuanto esta entidad vulneró mi derecho fundamental de al trabajo y al debido proceso consagrados en los artículos 25 y 29 de la Constitución Política de Colombia, respectivamente. Lo anterior lo fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 01 de abril del presente año presenté mi intención de optar por el cargo de Secretario de Juzgado Municipal Nominado sede Juzgado 001 promiscuo municipal de Chita.

SEGUNDO: El día 11 de abril de abril del presente año el Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá y Casanare publicó el listado del orden descendente del mes de abril.

TERCERO: Al verificar dicho orden se puede evidenciar que no se tuvo en cuenta el puntaje actualizado posterior a la clasificación realizada el día 28 de marzo de 2025.

CUARTO: Que de conformidad con la resolución CSJBOYR25-228, se puede evidenciar que mi puntaje actual es de 613,39 y no de 505,06 como aparece en la lista de orden descendente abril 2025.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Tratándose del **DERECHO AL TRABAJO**, en Sentencia T-257 de 2012, la Corte Constitucional en relación con el acceso a los cargos públicos, señaló lo siguiente:

“...Respecto del derecho al trabajo en relación con el acceso a los cargos públicos, ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación (...) que dicha garantía se materializa en cabeza del ganador del concurso, a quien le asiste el derecho de ser nombrado; en este sentido, a la posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del deber estatal de impedir que terceros restrinjan dicha opción (...). Al tratar esta materia en sentencia T-625 de 2000, el Tribunal Constitucional indicó:

‘La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima’...” ((Negrilla y subrayas fuera de texto).

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que el sistema del mérito tiene como propósito específico procurar la igualdad de trato y oportunidades, de manera que los mejores calificados sean quienes ocupen los cargos públicos. En efecto, esta forma permite la participación de cualquier persona que cumpla con los requisitos del empleo, en un esquema en el que no se permiten tratos diferenciados injustificados, y cuyos resultados se obtienen a partir de procedimientos previamente parame trizados. Incluso, la aplicación de este método permite eliminar la discrecionalidad del nominador y evitar que imperen criterios arbitrarios y subjetivos en la selección de los aspirantes.

Es claro que los concursos de méritos, como mecanismo de selección objetivo e imparcial, están sujetos a los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, AL PRINCIPIO DE BUENA FE Y AL DEBIDO PROCESO, que orientan la actuación de la administración.

En este orden de ideas, y conforme lo probado en lo tratado, es pertinente recordar que el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades en relación con las denominadas reglas de la convocatoria, destacando: Las reglas de la convocatoria, entonces, controlan la actividad de la propia administración y, a su vez, permiten, en general, a los concursantes conocer las reglas básicas del concurso, el cargo ofertado, los criterios o requisitos mínimos para participar, la forma en que los evaluarán, las etapas del concurso, las pruebas que deben presentar, el resultado que deben obtener para aprobar el concurso, la metodología para evaluar, entre otros aspectos. Concretamente, la sujeción a las reglas de la convocatoria implica, por un lado, que la administración no puede alterar inesperadamente las reglas previamente fijadas, pues las modificaciones intempestivas afectarían el principio de buena fe de los aspirantes que confían en que tales reglas se

mantengan. Y, por otro lado, implica que el aspirante, una vez se inscribe al concurso, queda sometido a esas reglas y posteriormente no podrá pretender que se modifiquen en su favor ni en detrimento de otros concursantes.

*La Honorable Corte Constitucional ha sostenido sobre el **DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO** (Art. 29, C. N.):*

“...(i) es un derecho fundamental de rango constitucional; (ii) implica todas las garantías mínimas del debido proceso concebido en el artículo 29 de la Constitución; (iii) es aplicable en toda actuación administrativa incluyendo todas sus etapas, es decir, desde la etapa anterior a la expedición del acto administrativo, hasta las etapas finales de comunicación y de impugnación de la decisión; y (iv) debe observar no solo los principios del debido proceso sino aquellos que guían la función pública, como lo son los de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...” (Negrilla y subrayas fuera de texto).

El debido proceso administrativo establece límites a las autoridades mediante las leyes y garantiza derechos a los administrados. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B:

“...La Constitución Política de 1991, en su Artículo 29 consagra el derecho fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad (...), el cual constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho, toda vez que impone un límite claro al ejercicio del poder público, en especial, a la aplicación del ius puniendi, teniendo en cuenta que las funciones del Estado deben ser desarrolladas, con la estricta observancia de los lineamientos o parámetros establecidos previamente por el legislador.

El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa. (...)

Entonces, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho fundamental objeto de estudio en el presente acápite ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por las decisiones de la administración. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo está constituido por las siguientes prerrogativas:

“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”. (...)

En virtud de lo expuesto, el debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa...” (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la Sentencia SU-913 de 2009:

“...(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y auto controla, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido. (Negrilla y subrayas fuera de texto).

De lo anterior se colige que existe un fundamento legal y constitucional para proteger mi derecho fundamental al trabajo y al debido proceso, más aún cuando a través de éste se propende por la protección del bien común.

En virtud de lo anterior solicito respetuosamente se me concedan las siguientes:

PRETENSIONES:

1. Se proteja mi derecho fundamental al trabajo y al debido proceso consagrados en los artículos 25 y 29 de la Constitución Política.
2. Que, en tal virtud, se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá y Casanare que tenga en cuenta el puntaje actualizado de conformidad con la RESOLUCIÓN No. CSJBOYR25-228 el cual corresponde a 613,39 y por consiguiente realice dicho listado conforme a ello, es decir, que se realice la reclasificación del listado publicado el día 11 de abril del 2025.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le orden al Juzgado Promiscuo Municipal de Chita sea llevado a cabo mi nombramiento de conformidad con el listado actualizado teniendo en cuenta que mi puntaje es superior a los que me preceden en el listado publicado el 11 de abril del presente año.

MEDIDA PROVISIONAL.

Solicito respetuosamente que sea suspendido el nombramiento de acuerdo al listado del orden descendente abril 2025, correspondiente a la señora AGUILAR AREVALO LINA PAOLA, identificada con C.C. No. 1049608984 o a la siguiente persona hasta tanto no sea resuelta la presente acción de tutela.

JURAMENTO.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de tutela alguna por los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial.

PRUEBAS.

Con base en los hechos enunciados, solicito se tengan como prueba la RESOLUCIÓN No. CSJBOYR25-228 y el orden descendente abril 2025

Téngase como pruebas las que a continuación anexo:

Los contenidos como pruebas.

NOTIFICACIONES

Accionante: En la carrera 8 No. 15 – 53, Yopal, Casanare. Correo Electrónico: brianmartinezsalas@gmail.com . Tel: 3183939237

Accionada:

Consejo Seccional de Judicatura Boyacá – Casanare: Calle 19 # 8-11, Correo electrónico: entradasatun@cendoj.ramajudicial.gov.co - scrconsecjudboycas@cendoj.ramajudicial.gov.co . Tel: (608) 7425878 - (608) 7437525

Juzgado Promiscuo Municipal de Chita: Cl 4 3-52, Correo electrónico: jpmalchita@cendoj.ramajudicial.gov.co Tel: 3148250722

Accionante: **BRIAN MARTÍNEZ SALAS**

Accionada: **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE – JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE CHITA**

Atentamente,

Nombre: BRIAN MARTÍNEZ SALAS

C.C. 1065893864 de Aguachica, Cesar

Tel: 3183939237

Firma:

